Cuadernos de Economía. Vol. 22 165-172 1994.

La izquierda y la Europa de Maastricht

Pedro Montes

Introducción

Los esfuerzos de todos los gobiernos por aparentar que se ha impuesto una realidad europea irreversible y que el proceso de la unidad monetaria prosigue según los proyectos en vigor no pueden ocultar la complejidad de la situación y la inestabilidad en todos los ordenes que recorre a la Unión Europea. Durante los últimos años, grandes acontecimientos han sacudido al Continente europeo trastrocando la situación y sus perspectivas políticas. La integración europea, por otro lado, está provocando graves perjuicios económicos y sociales en la mayoría de la población de los países de la UE y en la aplicación del Tratado de Maastricht, cuyo objetivo fundamental es la creación de una moneda única, han surgido dificultades insalvables. Por ello, las posiciones de la izquierda en cuanto a la construcción de la unidad económica y monetaria europea no pueden venir determinadas por la entrada en vigor del Mercado Único como un hecho consumado ni por la ratificación formal del Tratado de Maastricht en noviembre de 1993, después de recorrer vicisitudes innumerables desde su aprobación por el Consejo Europeo en diciembre de 1991.

Todo lo avanzado en el proceso de la integración europea desde la firma del Tratado de Roma en 1957 hasta el Mercado Único no puede considerarse consolidado ante las modificaciones que ha sufrido el mapa europeo, las transformaciones que están teniendo lugar en los antiguos regímenes socialistas, los proyectos de ampliación de la actual UE y la crisis económica en la que están sumidos la mayoría de los países

comunitarios. Por otra parte, la construcción de la unidad económica y monetaria de Europa no esta trazada ni se agota por el Tratado de Maastricht, siendo, por el contrario, un tema del futuro, sobre el que de nuevo están por definirse los criterios con los que se ha proseguir la integración europea. En todo caso, además, desde el punto de vista de la izquierda, hay razones profundas para rechazar el dogmatismo neoliberal que ha sustentado hasta ahora dicha integración, de acuerdo con los intereses dominantes del capital.

Durante el período transcurrido desde las últimas elecciones al Parlamento Europeo en 1989 han tenido lugar una recesión generalizada y profunda de las economías europeas y una ofensiva contra los derechos y condiciones de vida de los trabajadores, al tiempo que la integración europea recibió un impulso con el desarrollo del Acta Única y la aprobación del Tratado de Maastricht. Esta simultaneidad entre la degradación económica y social y el reforzamiento de la integración de las economías europeas no es una mera coincidencia, sino que establece una relación de causalidad y revela dos hechos fundamentales. Primero, que las pautas de la construcción europea no se ajustan a las condiciones económicas imperantes, en la medida en que para proseguir la integración se han tenido que ocasionar graves quebrantos a muchos países y capas sociales y hasta el punto que las dificultades han paralizado los proyectos en marcha. Segundo, que esas pautas que no se ajustan a las necesidades de los pueblos europeos, a juzgar por las políticas nefastas que han tenido que aplicarse en todos los países para afrontar el marco competitivo surgido del Mercado Único y los intentos de implantar la moneda única.

El proceso de la integración europea, o está propiciado por una evolución económica favorable, que diluya los problemas sociales y las tensiones entre países que ocasiona, o tendrá que ser paralizado, pues, en el estado de crisis de los últimos años, ha llegado a originar una situación insostenible y bastante comprometida en casi todas las economías.

El proyecto que no pudo ser

Después de la polémica y división que provocó el Tratado de Maastricht entre las diversas corrientes de la izquierda, el primer hecho que debe resaltarse ante los planes vigentes para implantar la moneda única es que no son realizables. Al margen de otros muchos datos, como la recesión y el incumplimiento por la mayoría de los países de las condiciones de convergencia, la situación en la que desembocó el SME tras las crisis recurrentes que se sucedieron desde el referéndum en Dinamarca en junio de

1992 –la Libra y la Lira están fuera del sistema y a partir de agosto pasado se estableció una banda de fluctuación del 30%– muestra de un modo indiscutible que el proyecto de la moneda única es inviable según los plazos y ritmos establecidos en el Tratado de Maastricht. Las reglas del SME resultaron ser un dogal insoportable para muchas economías por la política restrictiva que imponía, y los compromisos y la colaboración con los que funciona el sistema promovieron un mecanismo demasiado frágil para soportar la capacidad especulativa de los mercados de capitales con plena libertad de movimientos de capital y las sustantivas diferencias existente entre las economías europeas, las cuales tienen que acabar reflejándose en la cotización de las respectivas monedas.

El práctico hundimiento del SME en julio de 1993 ha demostrado que no había bases económicas para integrar bajo una misma moneda a un conjunto de países tan diferentes y a un ritmo tan acelerado como el previsto. No se ha podido avanzar en la convergencia monetaria necesaria y, en estos momentos, la implantación de la moneda única se presenta como un objetivo inalcanzable, como reconocen incluso los más ardientes defensores del Tratado de Maastricht. De este modo, hay que dar por liquidada la polémica que recorrió a la izquierda en cuanto a apoyarlo o rechazarlo, sin perjuicio de que subsistan diferentes puntos de vista sobre la necesidad, conveniencia y criterios de construcción de la unidad europea. Los acontecimientos han zanjado el debate, siendo el propio sistema económico el que ha dictado una sentencia desfavorable al Tratado y los procedimientos fijados para lograr la unidad económica y monetaria. El hecho de que esté ratificado no lo hace menos inservible ni su vigencia legal evita que deba ser considerado en la práctica caduco. Por lo demás, seria ridículo que mientras los representantes del capital europeo dan por irrealizable el proyecto de la moneda única en los términos del Tratado de Maastricht (basta atenerse a las opiniones del Bundesbank, el depositario de la autoridad monetaria en el futuro Banco Central Europeo), fuese defendido por algunas corrientes de la izquierda en función de un europeismo artificial y contraproducente o de unas responsabilidades que no esta llamada a asumir, pasando por alto los perjuicios que está provocando en los intereses de los pueblos europeos.

Internacionalismo y competencia

Pero al margen de lo estrepitoso y la rapidez con la que se ha venido abajo el proyecto de la moneda única, las economías europeas han avanzado de un modo acusado en su internacionalización e interdependencia en los últimos tiempos, como consecuencia del desarrollo del Acta Única para establecer la libre circulación de mercan-

cías, servicios y capitales en el área comunitaria. Esta internacionalización creciente esta lejos de ser neutral económica y socialmente, lo que ha de ser tenido en cuenta por la izquierda al definir sus posiciones ante el tema de Europa.

Como consecuencia de esa internacionalización y de haberse descartado promover una convergencia real económica y social entre los países europeos antes de abordarse la unidad monetaria, la competitividad se ha erigido en el objetivo supremo de la política, lo que esta conduciendo a la adopción de políticas calamitosas desde el punto de vista económico y de marcado carácter antisocial. La supremacía de la competitividad y la sublimación del mercado como regulador absoluto de las relaciones económicas implican el retroceso de la intervención del sector publico en sus múltiples vertientes y la aplicación permanente de una política económica restrictiva, quedando los objetivos políticos internos subordinados a las condiciones externas impuestas por el resto de las economías, sobre las que no se tienen control ni influencia alguna.

A largo plazo, la productividad, como fundamento de la competitividad, encuentra mejor vía de solución en una política expansiva que en una restrictiva, al permitir una intensa acumulación que acrecienta la relación capital/trabajo, la renovación del capital productivo y la incorporación de nuevas tecnologías. Pero la compulsión inmediata por la competencia propicia políticas dirigidas a mejorar la competitividad por la vía de desvalorizar el capital obsoleto o poco rentable, reducir el empleo (con lo que se produce un incremento pasivo de la productividad) y recortar los salarios. En una muy corta perspectiva, y al margen de cualquier otra consideración sobre los objetivos que ha de perseguir la política económica y social, la competitividad se ve favorecida por las políticas de rigor y austeridad, las cuales además se corresponden con las recetas neoliberales para aumentar la tasa de beneficio como condición para superar la crisis económica.

Por ello, ante la perspectiva de la entrada en vigor del Mercado Único en 1993, en todos los países comunitarios se han venido aplicando durante los últimos años políticas de rigor, que han tenido la consecuencia fundamental de agravar y generalizar la recesión en que se fueron hundiendo las economías a partir de 1989 con el agotamiento de la fase expansiva del ciclo. Dicha expansión hubiera dado paso en cualquier caso a una fase recesiva, pero el cambio de tendencia del ciclo capitalista se vio intensamente reforzado por las políticas emprendidas en todos los países a fin de no perder posiciones en los mercados exteriores y acompasar la evolución interna a la coyuntura internacional. Por otro lado, el objetivo perenne de mejorar la competitividad está conduciendo a una ofensiva continua en contra de las condiciones de vida y derechos de los trabajadores, que se extiende a la cuestión de los salarios, el «Estado del Bienestar» y la regulación del mercado laboral. La competencia, como exigencia suprema, reclama bajos salarios, prestaciones y servicios públicos ínfimos, un sistema impositi-

vo regresivo y un marco de relaciones laborales extraordinariamente flexible en el que la «rigidez» derivada de los derechos de los trabajadores tiene que ser eliminada.

Las mismas implicaciones sobre la política tienen los criterios de convergencia aprobados en Maastricht para implantar la moneda única, lo que explica, entre otros motivos, la defensa férrea que del proyecto hacen algunos gobiernos a pesar de la crisis del SME. Las condiciones de convergencia –garantizar el tipo de cambio, controlar la inflación, reducir el deficit publico– y las reformas institucionales –autonomía del Banco Central, imposibilidad de financiar el deficit publico por vía monetaria– requieren aplicar políticas restrictivas y destruir conquistas sociales. Los planes de convergencia aprobados por algunos gobiernos para cumplir los requisitos de Maastricht representan planes de ajuste y austeridad, que han agravado la recesión económica y el deterioro social.

La Europa de Maastricht no es viable. Ni es un proyecto necesario en estos momentos de crisis. Ni, por supuesto, es una Europa idílica como sueñan ingenuamente algunas corrientes de la izquierda. La Europa del mercado y la moneda únicos es una Europa con millones de parados y en la que no puede sobrevivir el «Estado del Bienestar». La degradación de las condiciones económicas y sociales que se ha producido en los últimos años no es independiente de la Europa que se esta construyendo. La naturaleza del modelo económico y social que surge de la Europa de Maastricht entraña un mundo aberrante y perverso en el que, frente a un control de los recursos productivos para cubrir las necesidades materiales de la población, garantizar la mejora de las condiciones de vida, respetar la naturaleza y conseguir una sociedad cada vez mas justa e igualitaria, primará una lucha tribal y excluyente por los mercados, que implicará paro masivo, la destrucción del tejido productivo de los países débiles, el retroceso de los derechos laborales, la degradación de los servicios y prestaciones sociales, la precaridad en el empleo, etc. En esa Europa, están dadas las condiciones para que tengan lugar crisis sociales de imponderables consecuencias y para que surjan fenómenos políticos inquietantes, como la xenofobia, el racismo, el avance de las posiciones fascistas, el recorte de las libertades etc. Los que desde posiciones progresistas creen ver en el proceso actual de integración europeo un cauce para avanzar y una solución para evitar las tensiones y peligros que acechan al Continente, no han comprendido la naturaleza conflictiva y de clase del proyecto, y no hacen mas que cerrar los ojos a una realidad amenazante y apuntarse acríticamente a una causa ajena a la izquierda. La Europa de la marginación, la competencia y la exclusión, la que enfrenta a unos trabajadores con otros en los países europeos y vuelve la espalda al Tercer Mundo, nada tiene que ver con los objetivos y aspiraciones históricos de la izquierda. Maastricht es una pesadilla que hay que desechar.

El tema de la construcción de Europa, por consiguiente, sigue candente y no se puede dar por cerrado desde la izquierda, ni mucho menos por aceptado con sus rasgos actuales. Frente a los que admiten la situación presente y se pliegan resignadamente a los proyectos en vigor, intentando a lo sumo reformar los planes vigentes, tiene que abrirse camino una alternativa diferente. Una alternativa que en lo económico no se atenga y respete los dogmas neoliberales sino que responda a las necesidades sociales y al nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, y que propicie el pleno empleo en todas las economías y la mejora de las condiciones laborales, evite el «dumping social» entre países, fomente la cohesión y la convergencia real de las economías, respete el medio ambiente y contribuya a rescatar al Tercer Mundo de su atraso y miseria.

Paro, paro y paro

Entre tanto, es necesario apoyar políticas que den respuesta a los problemas agobiantes que tienen planteados la mayoría de los países europeos, muchos de los cuales tienen su origen, como se ha dicho, en las propias pautas seguidas en la construcción europea y cuyas soluciones, por tanto, chocan con ellas.

El paro –17 millones de personas en la CE, el 11% de la población activa– se ha erigido en el problema fundamental que ha de afrontar la izquierda, por el desastre económico que delata, por sus secuelas sociales y por los peligros políticos que entraña. Desde la izquierda no se puede aceptar un desaprovechamiento tan ingente de capacidades y recursos como el que representa el paro, ni se puede admitir la desesperación a que se ven condenados millones de personas, quienes no tienen otros recursos de vida en el régimen capitalista. Por otro lado, el paro genera múltiples consecuencias negativas en los individios y en la sociedad, creando al mismo tiempo condiciones favorables para que se ataquen los derechos de las capas sociales mas débiles. La ofensiva contra el «Estado del Bienestar» y las contrareformas del mercado laboral se acometen por el retroceso de la fuerza de la clase obrera, que esta determinado de un modo decisivo por un paro masivo prolongado. La política económica restrictiva cumple así también el papel, a través de mantener un alto nivel de desempleo, de crear las bases para destruir los derechos sociales y laborales de los trabajadores. El paro, en fin, es un fermento de descomposición social, que va en detrimento de la fuerza de los proyectos políticos liberadores, y constituye un campo abonado para el desarrollo de opciones políticas degeneradas y antidemocráticas. Difícilmente las libertades y las instituciones democráticas podrán sostenerse en una sociedad que renuncie al pleno empleo y esté socavada por la existencia de millones de parados.

El paro, de un modo incuestionable pues, tiene que ser el eje fundamental de la política económica que propugne la izquierda. Ello, por un lado, implica apostar por la expansión de la economía, en la que se han de tomar en consideración sus consecuencias ecológicas para evitar sus efectos nocivos pero se han de pasar por alto sus contradicciones con otros objetivos de la política económica y los obstáculos que oponga a la construcción actual de la Europa de Maastricht. Por otro lado, hay que partir de que en el mejor de los casos, una expansión de la economía solo permitiría mitigar los niveles actuales de desempleo, por lo que la política expansiva debe combinarse con una reducción sustancial de la jornada laboral, porque el avance tecnológico ya no permite con la jornada actual dar empleo a todos. Durante muchos años, un persistente incremento de la productividad se ha reflejado mínimamente en el acortamiento de la jornada laboral, siendo una de las razones que ha impulsado el crecimiento tendencial del paro durante la actual onda larga depresiva del capitalismo.

El peor de los casos

Todo cuanto antecede puede aplicarse de modo genérico al conjunto de los países que forman la Unión Europea, pero no se escapa que el impacto de la internacionalización de las economías ha sido mucho mas negativo en la economía española que en el resto, por tener unas estructuras productivas muy débiles y al haber tenido que soportar un doble proceso de apertura exterior: el derivado de su integración en la CE y el derivado del desarrollo del Acta Única. Por ello, la política restrictiva y antisocial que se ha resaltado como consecuencia inevitable de esa internacionalización y del intento de avanzar hacia la unidad monetaria ha cobrado mucha mayor dureza en nuestro país que en ningún otro, pues el desfase de competitividad era insalvable. Las consecuencias también son imparangonables: el capitalismo español ha acumulado un nivel de paro que dobla la tasa europea –el 23%, frente al 11% de la CE–, se han impuesto reducciones reales de salarios, se han recortado las prestaciones sociales de modo drásticos y se ha emprendido una contrarreforma laboral de un impacto destructivo enorme.

El retraso y deficiencias del capitalismo español combinado con la fe de los conversos del gobierno socialista en la doctrina neoliberal y una obsesión rayana en la vesanía por la construcción lo mas rápida posible de la unidad monetaria europea han dado como resultado una crisis económica y social pavorosa. La necesidad de combatir el paro en los países europeos con los argumentos dados es una emergencia en el caso de la economía española.

Hay que reconocer las dificultades de instrumentar una política expansiva y sus contradicciones después de los destrozos y la profunda recesión que se han provocado. No obstante, dicha política expansiva no tendría que ocasionar una mayor inflación ni un agravamiento del déficit publico a medio plazo si se tiene la paciencia de esperar a que la recuperación surta sus eficaces efectos sobre los ingresos públicos. Tampoco debería suponer un mayor deterioro del medio ambiente sino que, antes al contrario, podría servir para combatirlo. Por el contrario, una política expansiva choca en estos momentos con la convergencia propuesta en Maastricht, pero el Tratado, como se ha visto, ha pasado a mejor vida y, en todo caso, es necesario optar entre plegarse a unos objetivos inalcanzables para lograr un fin quimérico o escapar de una situación drámatica socialmente. Del mismo modo, la expansión desataría fricciones en el sector exterior, que habría que atenuar con la cotización de la peseta y una selectiva política proteccionista, como realizan todos los gobiernos menos desalumbrados por el neoliberalismo y Europa que el español. Por lo demás, la cuestión de la apertura exterior y el internacionalismo en los términos neoliberales del capitalismo es el núcleo del debate económico que recorre a la izquierda en muchos países, decántandose una posición mayoritaria que reconoce que las relaciones internacionales reguladas por la competitividad cavan la fosa de las economías débiles e impiden soluciones a la crisis y al empleo.

La expansión tiene algunos inconvenientes, pero no son comparables con los perjuicios y desastres que entraña prolongar la actual política. No existe otra alternativa. Ese es el reto que tiene el país, hasta el punto de que si no hubiera otra política, como falsamente propaga el Gobierno, habría que inventarla.